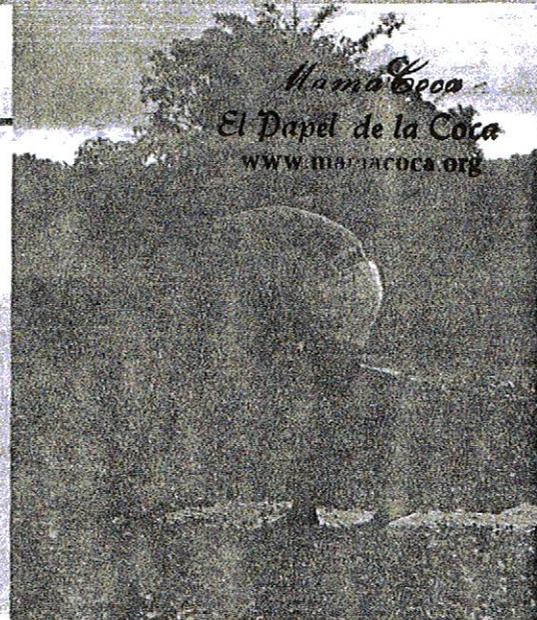




Más Droga y Más Guerra



Seleccionado de la hoja de coca en Bolivia.

UNA VEZ MÁS, COMO CADA VEZ QUE SE publican estadísticas al respecto, se descubre que el consumo de drogas prohibidas ha aumentado en los Estados Unidos. El director del Programa Nacional de Lucha Antidrogas, general Barry McCaffrey, fijó ese aumento, para los adolescentes, en un 105 por ciento durante el período 92-95. En el caso de la sola cocaína, y solo entre 1994 y 1995, el aumento fue del 166 por ciento. Los republicanos aprovecharon de inmediato el jugo electoral del informe asegurando que la culpa es del presidente demócrata Bill Clinton, quien confesó hace años haber fumado una vez marihuana en su juventud, «aunque sin aspirarla».

Al margen del oportunismo simplista de los republicanos, lo que resulta evidente desde hace muchos años es que el aumento en el consumo de las drogas prohibidas proviene de la prohibición, que es la política mantenida por todos los gobiernos, tanto republicanos como demócratas, desde hace tres décadas. Y es esa prohibición, y no la persona de Clinton, la que hay que suprimir si se desea empezar a controlar el desaforado aumento de la drogadicción. Hay droga, porque hay guerra contra la droga. Y hay más droga porque hay más guerra. Las autoridades encargadas del asunto son las únicas que no se han dado cuenta.

Porque si el resultado final de la guerra contra la droga es que el consumo de la droga se incremente —no sólo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero—, los resultados intermedios son todavía más descorazonadores. La corrupción es el más notorio. En México, donde la familia del ex-presidente Salinas lavó cientos de millones de dólares del narcotráfico, y donde el actual presidente Zedillo ha sido acusado de financiar su campaña con donaciones del Cártel del Golfo. En Colombia, donde el presidente Samper sigue en la cuerda floja por haber recibido fondos electorales del Cartel de Cali. En el Perú, donde el presidente Fujimori acaba de encontrarse con el más grave escándalo de sus seis años de poder por la revelación de que su principal asesor económico y militar, el ex-capitán Vladimir Montesinos, estaba a sueldo del célebre narcotraficante Vaticano. Para no hablar de los casos de Bolivia —el hoy preso ex-presidente general Mesa— o de Panamá —el hoy también preso general Noriega—. Y esa corrupción, por supuesto, no se limita a los presidentes de media docena de países: sino que, por el contrario, llega hasta los presidentes después de haber escalado los niveles inferiores de la clase política, de la policía y de las fuerzas armadas, y de la sociedad en su conjunto. El primer resultado, no de la guerra en sí sino de la guerra contra la droga, es la corrupción generalizada.

Si no se conocen datos sobre la corrupción de la droga en la política de los Estados Unidos, es simplemente porque los informes norteamericanos no hablan de ella. Pero por razones aritméticas es de suponer que esa corrupción también existe: del dinero que genera el negocio, por cada dólar se quedan en los Estados Unidos 97 centavos restantes.

Otro resultado intermedio de la guerra contra la droga —uno entre muchos— es la destrucción física de los países productores. En las selvas del Putumayo y el Caquetá colombianos, en el valle del Huallaga peruano, en el Chapare boliviano, la erradicación forzosa de las cosechas de coca emprendida por las autoridades por orden de los Estados Unidos y con herbicidas vendidos por los Estados Unidos ha provocado la sublevación de cientos de miles de familias campesinas que viven del cultivo (téngase en cuenta que el único producto de la agricultura tropical latinoamericana que tiene mercado internacional estable —y creciente— es la coca). Y ha provocado, a la vez, que esos campesinos perseguidos y envenenados se internen selva adentro para sustituir sus plantaciones destruidas. Esta migración forzosa provocada por las fumigaciones con herbicidas es la causa principal de la tala de la selva tropical de esos países. La guerra contra la coca —no la coca, sino la guerra contra ella— es el primer agente destructor de las selvas húmedas de América Latina: eso que los ecólogos llaman «el pulmón del mundo».

El tercer resultado de la guerra es, claro está, la violencia. Que se refleja no sólo en la infinidad de asesinatos de jueces y políticos (los incorruptibles) cometidos por los narcotraficantes en los países productores, sino en el crecimiento de la criminalidad en los países consumidores. Basta una sola cifra: gracias a la guerra contra la droga, la población carcelaria de los Estados Unidos se ha duplicado en los últimos cinco años.

Y todo ese encadenamiento perverso de miseria, destrucción, sangre y corrupción tiene como consecuencia final exactamente lo contrario del resultado buscado: que el consumo de drogas en los países receptores aumente. Salta a la vista que esa guerra está mal pensada.

O pensada teniendo en cuenta sólo los 97 centavos de ganancia que por cada dólar producido deja esa catástrofe en los circuitos financieros de EE UU. ■

El aumento en el consumo de las drogas prohibidas en EE UU proviene de la misma prohibición, que es la política mantenida por todos los gobiernos, republicanos o demócratas desde hace tres décadas